

Honduras más allá de Zelaya

Ismael Moreno

La suerte ya está echada contra el Presidente Zelaya. Los acuerdos del 30 de octubre fueron una trampa tendida por Estados Unidos.

Las elecciones no lo serán para la candidatura independiente de Carlos H. Reyes. Y la lucha continuará en nuevos escenarios. Shannon logró en pocas horas lo que ni el Presidente Arias ni la OEA ni los propios hondureños protagonistas del conflicto habían logrado.

¿Qué ocurrió? Son muchas las conjeturas en este país que, a falta de gobernabilidad, se ha dejado atrapar por el gobierno de los rumores.

«Reitero mi más profundo agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por el firme apoyo que nos está dando para poner en marcha los acuerdos, y lamento que el señor Zelaya sea el único que se niega a enviar sus candidatos para conformar el gobierno de unidad nacional».

Éstas fueron las palabras de Roberto Micheletti al filo de la medianoche del jueves 5 de noviembre, cumpliendo así con uno de los escasos plazos establecidos por los acuerdos de Tegucigalpa firmados el 30 de octubre por las dos comisiones protagonistas del diálogo, bajo la mirada implacable y precisa de Thomas Shannon, subsecretario para asuntos hemisféricos del Departamento de Esta-

do del gobierno de Obama. El Presidente Zelaya Rosales respondió dando por fracasados los acuerdos, calificándolos como «letra muerta». En este escenario inconcluso, pero concluido, todo apunta a que la suerte de Zelaya como mandatario hondureño está echada irremediabilmente en su contra, y aun en el caso de ser restituido en su cargo, a estas alturas del conflicto su presencia o no al frente del Ejecutivo no pasa ya de ser un asunto irrelevante.

El mediador estadounidense

Thomas Shannon llegó a Honduras 24 horas antes, y tras reunirse por separado con Zelaya y con Micheletti con los candidatos presidenciales y los altos dirigentes del empresariado hondureño, las comisiones de Micheletti y Zelaya firmaron con prontitud y docilidad unos acuerdos que formalmente ponían punto final a cuatro meses de un tormentoso golpe de Estado y a un no menos turbulento proceso de negociaciones, que arrancaron el 7 de julio, y que, inmediatamente antes de la llegada de la comisión del Departamento de Estado, no sólo apuntaba a un estancamiento, sino hacia el peor de los escenarios: más ingobernabilidad y creciente violencia.

La firma de los acuerdos despertó euforia en los sectores afines a Zelaya, tal como ocurrió el 21 de septiembre cuando el hombre del sombrero irrumpió sorpresivamente en la embajada de Brasil, tal como pasó en la segunda semana de julio cuando Zelaya hizo el amago de cruzar el puesto fronterizo de Las Manos en Nicaragua, o como aquel domingo 5 de julio, cuando intentó aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa ante la vibrante concentración de decenas de miles de hondureños que apenas comenzaban a organizarse en el inédito fenómeno político que ha sido la resistencia popular hondureña.

Como en todas estas ocasiones anteriores, la euforia por la firma de los acuerdos del 30 de octubre, se convirtió casi de inmediato en amarga frustración.

En lugar de la restitución de Zelaya en la Presidencia, los acuerdos le dieron mayor fortaleza a los golpistas, y en lugar de organizar la fiesta para celebrar el triunfo de su jefe, los zelayistas, y la resistencia en general, han tenido que seguir organizando protestas y repudios, ahora no sólo en contra de los michelettistas, sino en contra de la trampa tendida por la comisión de alto nivel encabezada por Shannon, un personaje que días antes del 28 de junio, el día del

Honduras más allá de Zelaya

golpe, había estado en Honduras para entablar diversas reuniones con quienes días después protagonizarían el golpe de Estado y lo sostendrían durante más de cuatro meses.

De acuerdo a diversas versiones, Shannon llegó ahora en noviembre con dos carpetas. En uno traía la copia de los documentos que debían completarse como contenidos de los acuerdos que debían firmar las dos comisiones. Esta carpeta no podía retornar a Washington sin las firmas.

En una segunda carpeta traía los documentos que respaldaban las amenazas y advertencias que el Departamento de Estado haría a los protagonistas del conflicto para conminarlos a firmar la primera carpeta. Entre las amenazas estaban la descertificación de Puerto Cortés, lugar por donde se cargan y descargan mercancías y productos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, si al filo de la medianoche del jueves 29 de octubre los usurpadores del Estado de Honduras no se decidían a firmar los acuerdos.

También contenía advertencias sobre la posible exclusión de Honduras del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la suspensión del TPS concedido a las decenas de miles de migrantes

hondureños indocumentados que viven en Estados Unidos. También traía Shannon pruebas de las diversas vinculaciones de altos personajes de la política y de la

*los republicanos estaban
utilizando el retraso
de la solución del conflicto
hondureño como argumento
para achacar a Obama
y a los demócratas su
incompetencia para resolver
asuntos de democracia en
países bajo la influencia de
Estados Unidos; si Obama
no lograba resolver un
conflicto como éste,
¿cómo podría hacer frente
con éxito a los más serios
problemas que afronta la
administración demócrata
fuera y dentro del territorio
estadounidense?*

gran empresa privada hondureña a actividades del narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando millonario de mercancías. Pero sobre todo, Thomas Shannon traía –más que amenazas y advertencias– la total seguridad del respal-

do de Estados Unidos a los golpistas en su proceso hacia las elecciones, a cambio de la firma de los acuerdos.

El caso Honduras perjudicaba a Obama

Una semana después de la firma de los acuerdos, a nadie le quedaban dudas de que todo fue una hábil trampa tendida a Zelaya. La pregunta es qué tipo de amenazas, advertencias –y por qué no decirlo, qué ventajas para los negociadores zelayistas– habría recibido el Presidente derrocado para que sus delegados firmaran unos acuerdos que dejaban abiertas las puertas para la legitimación del golpe de Estado.

La Comisión Shannon tenía urgencia por la firma de los acuerdos no porque le interese Honduras, sino porque Honduras se ha convertido en un problema para la política interna de la administración Obama. En los días de la firma de los acuerdos, el caso Honduras había superado al caso Afganistán. Los republicanos estaban utilizando el retraso de la solución del conflicto hondureño como argumento para achacar a Obama y a los demócratas su incompetencia para resolver asuntos de democracia en países bajo la influencia de Estados Uni-

dos. Si Obama no lograba resolver un conflicto como éste en un país tan pequeño y dependiente como éste, ¿cómo podría hacer frente con éxito a los más serios problemas que afronta la administración demócrata fuera y dentro del territorio estadounidense?

Shannon no podía regresar sin haber dejado «pacificados» a los hondureños, y sin haberse sacudido de un problema político externo que ya estorbaba las políticas internas de Barak Obama.

El «poder inteligente»

Los acuerdos han dejado en claro que, al final de cuentas, era el gobierno de Estados Unidos quien tenía en sus manos la más alta dosis de responsabilidad para resolver, agudizar o mantener el golpe de Estado y sus consecuencias. Según la investigadora estadounidense Eva Golinger, el proceso de «negociación» en Honduras, conducido por Estados Unidos, se explica teniendo en cuenta los tres modelos de diplomacia que en sus relaciones internacionales ha tenido ese país. Presidentes como George W. Bush emplearon el «poder duro» (*Hard Power*): armas, bombas, amenazas e invasiones militares. Bill Clinton utilizó el «poder suave» (*Soft Power*): la guerra cultural,

Hollywood, ideales, diplomacia, autoridad moral y campañas para ganar «las mentes y corazones» de las poblaciones civiles en países adversarios. La administración de Barack Obama ha optado por una combinación de esos dos conceptos, fusionando el poder militar con la diplomacia, la influencia política y económica con la cultural y legal, llamándolo el «poder inteligente» (*Smart Power*). La primera aplicación de esta modalidad ha ocurrido en Honduras con el golpe de Estado.

«¿Qué es lo inteligente de esta concepción? –escribe Golinger–. Que es una política difícil de clasificar, difícil de detectar y difícil de desmontar. El caso de Honduras es ejemplar. Por un lado, el Presidente Obama condenaba al golpe contra el Presidente Zelaya, y por otro, su embajador en Tegucigalpa se reunía constantemente con los golpistas. La Secretaria de Estado Clinton repetía desde el primer día del golpe, y muchas veces más durante los últimos cuatro meses, que Washington no quería meterse ni influir sobre la situación en Honduras, porque eran los hondureños quienes tenían que resolver su crisis, sin ninguna injerencia externa... No obstante, fue el lobby de Washington el que redactó el «acuerdo» de San José, y al final, fueron los altos funcionarios

de la Casa Blanca y del Departamento de Estado quienes tuvieron que «persuadir» a los hondureños para que aceptaran ese acuerdo.

A pesar de la constante injerencia de Estados Unidos en el golpe de Estado en Honduras –desde su financiación, diseño y apoyo político hasta el apoyo militar–, el «*Smart Power*» ha logrado distorsionar la realidad ante la opinión pública mundial, convirtiendo al dúo Obama-Clinton en los «grandes ganadores del multilateralismo».

Con los acuerdos del 30 de octubre se dio un movimiento circular que comenzó en Washington en junio: Hillary Clinton le pasó la *patata caliente* a Arias y de San José el acuerdo vino a Honduras como acuerdo de Guaymuras, para terminar de nuevo en las manos de Washington, aunque los acuerdos se hayan firmado en Tegucigalpa.

Los acuerdos han sido más una trampa que le resolvió un problema a Obama, que una solución para Honduras, porque el conflicto continuará. Obviamente, los acuerdos del 30 de octubre dieron a la comunidad internacional una atmósfera distinta con la noticia de que los hondureños habían resuelto por fin el conflicto. Los sectores golpistas logran con estos acuerdos el objetivo de abrirse el espacio que necesitaban para que las elecciones

del 29 de noviembre adquieran reconocimiento internacional.

El segundo paso del golpe

Con los acuerdos, el golpe de Estado avanzó en su proceso de consolidación. Lo ocurrido el 28 de junio no fue un acto puntual. Se trató de un golpe de Estado en construc-

el retiro de Carlos H. Reyes de las elecciones ocurre de forma independiente sobre la decisión de si se reintegra o no a Zelaya en la Presidencia; lo hace, como él mismo lo explica, «para denunciar unas elecciones que en su esencia niegan la democracia, y por respeto a una ciudadanía que ha manifestado su inclinación a continuar con una resistencia que siga avanzando hacia una propuesta política que participar en los procesos electorales a través de las candidaturas independientes»

ción con tres pasos bien definidos y programados. El primer paso fue el acto violento del último domingo de junio.

El segundo paso ha de cristalizar el 29 de noviembre con las elecciones generales. Para los sectores golpistas, de lo que se trata en este segundo paso es de tener unas nuevas autoridades salidas de elecciones que sean reconocidas por todos. Garantizar estas elecciones reviste una importancia enorme. Como si se tratara de una gran fábrica que garantiza que salgan calcetines, camisetas o pantalones bien confeccionados, las elecciones deben garantizar que salgan alcaldes, diputados, designados y un Presidente de la República totalmente aceptados.

Para asegurar el segundo paso del golpe, los golpistas necesitaban crear un clima internacional en el que Honduras quedara en el olvido. Y qué mejor que hacer creer a través de las firmas entre los protagonistas del conflicto que Honduras ya se pacificó. El caso hondureño comenzará a ser un asunto del pasado, aunque dentro del país los problemas sigan intactos. Los acuerdos dejan también abiertas las puertas para seguir dilatando decisiones. Quieren que pase el tiempo sin que se haga efectivo el reintegro de Zelaya en la Presidencia de la

República. El acuerdo cinco, el fundamental, sostiene que la restitución o no del presidente depuesto queda en manos del Congreso Nacional, que puede decidir, sin plazo establecido, tanto si vuelve Zelaya como si no vuelve, con el compromiso de ambas partes de aceptar cualquiera que sea la resolución que el Legislativo decida tomar.

Los golpistas logran así jugar con el tiempo del regreso de Zelaya hasta una fecha en la que ya Zelaya no tenga ni la más mínima oportunidad de incidir en los resultados electorales. Una vez que los sectores golpistas establecieron las condiciones para legalizar las elecciones y dejaron sin margen a Zelaya para inferir en las mismas, avanzarán con éxito hacia el 27 de enero, fecha en la que tomará posesión del gobierno las nuevas autoridades. Llegará así a término, con este tercer paso, la primera etapa del golpe de Estado en construcción.

Para los golpistas, que Zelaya sea restituido en la Presidencia una semana antes de las elecciones o una vez celebradas, es ya un dato de muy poca monta, porque el hombre del sombrero dejó de ser una amenaza. Tenerlo en la Presidencia por cortísimo tiempo lo convertirá en una figura decorativa, a la vez que cumplen con un

requisito para la legitimación del proceso político que ellos controlan totalmente.

Unas elecciones sin nuevos candidatos

Más preocupante es para los sectores golpistas –aunque tampoco un factor que les haga perder el sueño– la ausencia en las urnas de candidaturas independientes, particularmente la del dirigente sindical y popular Carlos Humberto Reyes, puesto que su participación en las elecciones ofrecería, sin duda, la única aportación ornamental y elegante a un proceso carente de novedades. Con la participación de Carlos H. Reyes los sectores golpistas estarían alcanzando una auténtica legitimación de las elecciones, porque ante la sociedad, y especialmente ante la comunidad internacional, podrían presentarlas y venderlas como pluralistas y tan tolerantes como para abrirle espacios a un sector de indiscutible militancia izquierdista, que ha participado en la resistencia contra el golpe.

La incorporación de la candidatura a la Presidencia de Reyes no variarían los resultados electorales, ya cantados, con el triunfo de uno de los dos candidatos del bipartidismo hondureño, con el agravante

de que la reducida cantidad de votos que alcanzaría Carlos H. Reyes –que jamás reflejaría el caudal real de votos que obtendría si hubiese contado con tiempo suficiente para crear estructuras y desarrollar una verdadera campaña electoral– serían manipulados para confirmar que la resistencia contra el golpe no pasaba de ser la de un puñado de resentidos, a quienes el pueblo, en un arranque de defensa de la democracia, les dio la espalda en las urnas.

Carlos H. Reyes entendió así su eventual participación, y esto explica su decisión de retirarse de un proceso al que valora como un instrumento legitimador del golpe de Estado.

Así como el Presidente *de facto* Michelletti envió una carta a Zelaya para que presentara una lista con diez candidatos para integrar el gabinete del supuesto nuevo gobierno de unidad nacional, igual hizo con Carlos H. Reyes. El candidato independiente lo considera una más de las burlas de los golpistas. «Lo que nosotros le devolveremos –dice con firmeza– es nuestra carta de retiro de esas elecciones, acompañada de una denuncia pública del por qué valoramos que este proceso electoral es el instrumento más grande para avanzar hacia una dictadura legalizada».

La UD busca a Reyes

Previo a su decisión de no participar en elecciones consideradas viciadas, Carlos H. Reyes y su equipo pasaron por un proceso interno de debate con el partido de izquierda Unificación Democrática, cuyo candidato presidencial –César Ham– propuso declinar su candidatura para cedérsela a Reyes, a cambio de que éste abandonara ese partido de izquierda, fundado por Decreto Ejecutivo en 1992.

UD es un partido que en los diversos procesos electorales en que ha participado no ha logrado superar los 30.000 electores, hasta culminar en este año, poco antes del 28 de junio, en un hervidero interno de pleitos y divisiones que le incapacitaban para hacer frente a estas elecciones.

Carlos H. Reyes no podía abandonar la candidatura independiente para acogerse a la de un partido desgastado, desacreditado y en franco proceso de extinción, un partido que tras el golpe de Estado y bajo la sombra protectora de Zelaya, busca hoy capitalizar la resistencia popular, cuya fuerza y creatividad ha superado a las instancias organizativas y políticas de la izquierda y del movimiento popular hondureño. De haber pasado a ser can-

Honduras más allá de Zelaya

didato del partido de izquierda, Carlos H. Reyes le habría dado a los golpistas el gusto de ser un adorno en las elecciones generales, le habría inyectado vida a un partido moribundo y habría dilapidado la novedosa oferta de una candidatura independiente, respaldada por los sectores más honestos del movimiento popular y social hondureño.

El retiro de Carlos H. Reyes de las elecciones ocurre de forma independiente sobre la decisión de si se reintegra o no a Zelaya en la Presidencia. Lo hace, como él mismo lo explica, «para denunciar unas elecciones que en su esencia niegan la democracia, y por respeto a una ciudadanía que en las diversas consultas ha manifestado mayoritariamente su clara inclinación a no acudir a las urnas electorales, sino a continuar con una resistencia que siga avanzando hacia una propuesta política que, sin convertirse nunca en un partido político, se mantenga firme en su decisión de participar en los procesos electorales a través de las candidaturas independientes».

Tercera etapa del 2010 al 2014

Con la primera etapa del golpe de Estado, los sectores que lo impul-

saron y lo han consolidado, buscaron revertir estratégicamente el proceso de reformas y acuerdos asumidos por la administración de Zelaya Rosales dentro del bloque latinoamericano liderado por Hugo Chávez.

A partir del 27 de enero del 2010 comenzará la segunda y decisiva etapa del golpe de Estado con un

*la suerte de Zelaya está
echada, pero la resistencia
hondureña siempre fue
mucho más allá de Zelaya
y es positivo que la
candidatura independiente
haya superado la tentación
de quedarse atrapada
en la demanda inmedatista
de tan manipuladas
elecciones*

nuevo gobierno que impulsará nuevas coordinadas económicas, políticas, jurídicas, militares y de seguridad como barrera de contención del imperio para arrasar de raíz cualquier brote político de izquierda, los antiguos y los nuevos, garantizándose así Estados Unidos que no se ponga de nuevo en riesgo su proyecto econó-

mico en Honduras, que gira en torno al control de las transnacionales.

Esta segunda etapa, que habría de extenderse hasta el año 2014, estaría definida por un régimen político con fuertes rasgos autoritarios y estaría sostenido en tres pilares fundamentales. Un plan económico agresivo para recuperar el bache que para los empresarios significó el «sacrificio» de la primera etapa. Un plan de compensación social para contrarrestar las demandas y movilizaciones de los sectores en resistencia. Y un plan de seguridad y de profilaxis, que combinaría dispositivos de persecución a la delincuencia y, bajo este mismo paraguas, impulsaría la persecución, represión, desarticulación y neutralización de los sectores opositores al régimen continuador del golpe de Estado.

La decisión de la izquierda independiente de renunciar a participar en las elecciones del 29 de noviembre le quita a los golpistas la guinda que soñaron con poner sobre su pastel electoral. Esa decisión revela –hasta a los más ingenuos– la naturaleza de un proceso electoral diseñado meticulosamente para consolidar un proyecto político que se destapó con toda su furia el 28 de junio.

¿Y después de Zelaya qué?

La suerte de Zelaya está echada. Quedó ya echada y los golpistas siguen su marcha arrolladora hacia la construcción de su proyecto con el total apoyo de Estados Unidos. Pero la resistencia hondureña siempre fue mucho más allá de Zelaya y es positivo que la candidatura independiente haya superado la tentación de quedarse atrapada en la demanda inmediatista de tan manipuladas elecciones. Esa candidatura se queda aquí, como reserva política, ética y popular para reestructurar e impulsar el proyecto político que con el triunfo temporal de los golpistas, adquiere mayor urgencia y vigencia. La lucha de la resistencia popular en contra del golpe no sólo no está perdida. Apenas comienza. Se perdió una batalla importante, que fue controlada y definida desde las alturas y a ritmos que dependieron de análisis muy alejados de la realidad y de la conciencia de la población y de los estados de ánimo de Zelaya y su equipo. Hoy la resistencia popular independiente, con sus sectores comunitarios y territoriales en movimiento y desarrollo organizativo, son garantía para capitalizar todas las energías, fuerzas y creatividades que nacieron a borbotones en estos meses de esfuerzos y de luchas pacíficas y ciudadanas. ■